

sillo la regulación más sustancial del derecho de la Iglesia latina, y la doctrina tradicional elaborada en torno a la misma.

Al estudiar cada una de las instituciones, presenta las nociones y divisiones más usuales, la doctrina legal y el pensamiento de los autores. No se propone discernir lo que es legislación de lo que es simple elaboración científica, y menos aún presentar la polémica surgida en cada uno de los temas; sólo pretende exponer en forma sencilla y asequible, prescindiendo de cita bibliográficas y de número de cánones, la doctrina más común en la Iglesia.

Recoge las instituciones en el mismo orden establecido en C. I. C.: en las normas generales se detiene especialmente al tratar la ley, ya que esta fuente objetiva de derecho ofrece un interés peculiar. Del libro segundo recoge fielmente la parte primera «de clericis», si exceptuamos el título «de officiis» que el autor une al «de beneficiis» del libro tercero, dada su íntima vinculación jurídica; a la parte segunda y tercera dedica menos espacio: en ellas ofrece sin embargo alguna idea sobre las llamadas «sorores externae» y sobre los «Institutos Seculares», instituciones aún no incluidas en el Código. Los libros restantes aparecen muy resumidos, si bien el espacio que dedica al derecho matrimonial se extiende todo lo que pueden permitir los límites de un simple sumario.

El deseo de máxima concisión mostrado por el autor le ha obligado a pasar por alto o sólo insinuar muchos problemas de marcado interés jurídico, cuya exposición hubiese enriquecido el mérito de la obra.

Valentín Soria nos ha elaborado una especie de «Vademecum» o pequeño manual de instituciones que puede ayudar al sacerdote en la solución rápida de dudas jurídicas que con emergencia surgen a veces en la vida pastoral. Este es el fin primordial que persigue en su obra, como se deduce de los detalles prácticos mínimos a que descende: sirvan de ejemplo, alguno de los requisitos anteriores a la celebración del matrimonio que recoge en la página 143.

JUAN ARIAS

PAUL L. LOVE, A. B., J. C. L., *The Penal Remedies of the Code of Canon Law*, Cath. U. of America Canon Law Studies 404, 1 vol. de XII + 178 págs.,

Cath. U. of Am. Press., Washington, 1960.

La colección canónica de tesis doctorales de la Catholic University of America contiene un gran número de estudios interesantes. Como la gran mayoría de las tesis doctorales, no constituyen obras cumbres de la ciencia canónica pero sí aportaciones valiosas a puntos concretos del Derecho canónico. La tesis de Paul Love refleja perfectamente estas características de la colección.

La tesis está bien organizada desde un punto de vista formal y material. El primer capítulo, sobre el fundamento jurídico de los remedios penales del código, contiene un análisis muy interesante y útil de la Instrucción *Sacra Haec*, predecesor de la actual legislación codificada. En los capítulos siguientes el autor examina científicamente y minuciosamente las características de los remedios penales y su naturaleza jurídica; la discutida cuestión de la naturaleza penal de los remedios penales; y finalmente cada uno de los remedios en particular.

Las cuestiones de teoría jurídica las trata el autor de una manera claramente reconocible como de tesis doctoral. Expone la historia, presenta las opiniones, las analiza y propone su solución. El método es universal y siempre válido, pero hay una cierta agilidad en su utilización que distingue al alumno del profesor, al que comienza del maestro. Love, cuando escribía estas páginas, era todavía lo primero.

En cambio, la presentación de los aspectos prácticos nos parece de mayor valor. Con sumo cuidado el autor ha descrito la manera precisa de aplicar cada uno de los remedios penales. Es este un aspecto del Derecho canónico que con demasiada frecuencia se descuida, tanto en la enseñanza como en los estudios.

En su conjunto se trata de una excelente tesis que puede ser leída con provecho.

WILLIAM H. STETSON

ANGELUS MITRI, O. M. I., *De figura iuridica postulantis, in causis Beatificationis et Canonizationis*, 1 vol. de 192 págs., Desclée, Roma, 1962.

Este libro, es una monografía sobre el Postulador, desde el punto de vista doctrinal, enriquecido con abundantes datos

## BIBLIOGRAFIA

prácticos sobre las actuaciones procesales del mismo.

Consta de dos partes. La primera, brevísima, resume en treinta y cinco páginas toda la evolución histórica de la figura del Postulador. La segunda analiza las disposiciones del actual Derecho Canónico positivo sobre el Postulador, a lo largo de las cien páginas que la integran y que son de indudable interés.

Es evidente que al abordar como tema principal la figura jurídica del Postulador Mitri se ve obligado a opinar acerca de muchos temas debatidos por los procesalistas del Derecho Canónico. En las páginas 63 y 64 califica a los procesos de beatificación y canonización como intermedios entre los procesos canónicos judiciales y los procedimientos administrativos; la razón —afirma el autor— es que participan del género de los procesos judiciales y administrativos; de los primeros en cuanto a la forma, de los segundos en cuanto a la íntima naturaleza y competencia atribuida a la S. C. de Ritos. De ahí que, por tratarse en ellos más sobre la verdad de las virtudes heroicas del siervo de Dios que sobre la justicia y el derecho a la solemne canonización, deben ser considerados procesos eclesiásticos «sui generis». Dos datos fundamentales se dan en estos procesos. El primero de ellos se refiere a la naturaleza misma del acto conclusivo en el que, simplemente, se declara que consta o no sobre las virtudes heroicas del siervo de Dios. El segundo está en relación con el conjunto de actos y formalidades del proceso judicial. Estos actos y formalidades están especificados por el fin al que tienden: proporcionar al tribunal los elementos necesarios para profundizar en el estudio legítimo que lleva a la certeza moral acerca de las virtudes heroicas del siervo de Dios.

A mi modo de ver, estos dos rasgos a los que alude el autor son los que tipifican el proceso judicial en su sentido más estricto, si bien se hace necesario matizar en qué plano realizamos esta afirmación. En efecto, un proceso podría ser llamado judicial o administrativo, según el tipo puro, esencial, que se denomina juicio o acto administrativo. Pero normalmente, cuando en la vida jurídica se pregunta si un asunto determinado debe tramitarse con formalidades judiciales o administrativas, quizás lo que menos im-

porta sea saber si la resolución sobre dicho asunto sea una resolución esencialmente judicial o administrativa. Lo que interesa es si debe tramitarse según los procesos marcados por el Derecho Canónico que proporcionan un peculiar conocimiento legítimo sobre un asunto, que será resuelto por el órgano competente, mediante una decisión facilitadora de la resolución pertinente; o, por el contrario, que sea el administrador quien lo decida por otras vías estatuidas. Al proceso judicial —y según mi opinión también al proceso de canonización— le matiza el ser «cognitio veri» y la verdad es una que viene determinada por la norma y por el hecho concreto. Evidentemente, el rasgo fundamental del proceso judicial consiste en la suficiencia para aportar el grado de conocimiento necesario para afirmar con certeza moral la existencia o inexistencia, v. gr. de un matrimonio; analógicamente, en el proceso de canonización ese rasgo fundamental es el otorgar la certeza moral sobre la existencia de unas virtudes heroicas en el siervo de Dios, o sobre la sobrenatural causa del martirio.

Las razones que, concretándonos al Derecho Canónico positivo, nos mueven a tipificar así el proceso judicial se contienen —entre otros— en el can. 1869. En él deja el Legislador claramente establecido que el proceso judicial tiende a través de los actos que lo integran a producir en el tribunal la certeza moral *ex actis et probatis*. Esta pretensión que el ordenamiento jurídico proclama en el citado canon, se alcanza a través de los medios de prueba típicos de los procesos judiciales. Ello nos indica que la función judicial en el ordenamiento canónico viene esencialmente especificada por el requisito de la certeza moral o conocimiento prudencial de lo verdadero.

Por eso, pensamos que son estrictamente judiciales los procesos de canonización, precisamente, por lo que afirma el autor: son «cognitio veri» y lo que tipifica —según mi entender— en el ordenamiento canónico positivo la vía judicial son los medios más aptos y adecuados para llegar a un grado de conocimiento técnico que, en todo caso, precisa la Congregación de Ritos a la hora de definir con certeza moral si se dan o no en grado heroico las virtudes del Siervo de Dios, o la heroica causa del martirio.

No se trata de un simple hacer lo más

conveniente, lo más oportuno, etc. típico de las resoluciones administrativas. Y menos de complicar las ya intrincadas actividades procesales creando una nueva naturaleza en el actuar procesal, para la que el autor no alega ningún argumento.

Es más, insiste una vez y otra a lo largo de su obra que el derecho supletorio para las normas jurídicas insuficientes sobre el Postulador debe tomarse, precisamente, de los cánones referentes a los procesos judiciales; afirmación acertada a mi entender.

Son numerosas las sugerencias del autor, que a veces pueden sorprender. Por ejemplo: conveniencia de que se reforme el Código de Derecho Canónico para facilitar la canonización de personas no pertenecientes a los Religiosos; mayor autonomía e independencia de los Ordinarios del lugar, en estos procesos; simplificar y abreviar todo lo referente a revisiones, discusiones, juramentos, otros requisitos de los que suele dispensarse con facilidad, solemnidades etc.; sustituir el manuscrito por otros medios mecánicos; reducir la pena de nulidad e invalidez de los actos procesales, a aquellos realmente transcendentales; dar libertad al Postulador para que, cuando a él le parezca más oportuno, solicite la incoación del proceso de milagros, etc. También, estima el autor que debe concedérsele mayor importancia a la fama de santidad de que goza el Siervo de Dios en la comunidad, aún cuando —quizás esto habría que estimarlo con mayor ponderación— la discreción de la vida ordinaria y oculta en Dios, necesariamente debe disminuirla; así como, también se pide en este libro simplificar el criterio de las virtudes heroicas.

Es un acierto, por otra parte, el deseo de introducir en la valoración de los testimonios, junto al tradicional certificado de buena conducta y fama de los testigos una valoración de idoneidad psicológica; y, para el cargo de postulador, un título pontificio.

Cierran el libro varios apéndices y una extensa bibliografía, muy completa.

CECILIO LÁZARO

ANGEL FÁBREGA GRAU, *La idoneidad del candidato al imperio según la doctrina y la actuación del Papa Inocencio III*, 1 vol. de 31 págs., Seminario Conciliar, Barcelona, 1962.

Este trabajo monográfico ha sido leído como lección inaugural del curso académico 1962-1963, en el Seminario Conciliar de Barcelona, por el Dr. Fábrega, Catedrático de Historia Eclesiástica de dicho centro docente. Aún cuando es una exposición histórica, tiene interés jurídico, ya que el autor delinea el fundamento de derecho que impulsa a cada acontecimiento.

El esquema que se trasluce como usado por el autor para elaborar el trabajo, empieza con un rápido recorrido histórico de la vida del imperio, desde su origen hasta el inicio del pontificado del Papa Inocencio III. Luego, el autor se detiene para exponer el pensamiento del Romano Pontífice con relación al imperio. Una vez aclarado este punto, continúa la relación de los hechos, iluminados ahora por las antedichas aclaraciones doctrinales. Al final, el Dr. Fábrega concluye con una interesante comparación de las tres grandes épocas de la historia eclesiástica en relación al imperio, a las que nos referiremos posteriormente.

En el trabajo se expone como idea central la concepción del Papa Inocencio III de la consagración del emperador como derecho pontificio sobre el candidato elegido libremente —sin coacción eclesiástica— por los príncipes. Es sumamente interesante observar a través del sucedido histórico, de la mentalidad medieval —primeros años del siglo XIII—, y de la elaboración ideológica de Lotario de Segni, cómo la Iglesia defiende el derecho papal de consagrar al emperador y declararle defensor de la Cristiandad.

Dos citas textuales de Inocencio III, traídas oportunamente —cfr. pág. 9— nos dan una idea precisa de la postura del Papa frente al imperio:

«Exedit igitur, ut et spiritualis auctoritas et saecularis potestas, suae causae institutionis attendentes, concurrant ad Ecclesiae defensionem in unum, et utraque alteri suffragetur, ut, quos a malo ecclesiastica non revocat disciplina, brachium saeculare compescat, et eos, qui de feritate propria confidentes, gladium materiam non timent, spiritualis ultio subsequatur».

«...qui unanimes fuerimus et concordēs in bono, profecto, sicut propheta testatur, sol et lune in ordine suo stabunt, eruntque prava in directa et aspera fient plana, cum nobis duobus favent Domino, nihil obstare vel resistere possit».